

Asociación por una Tasa a las Transacciones financieras para Ayuda al Ciudadano

EL GRANO DE ARENA

AÑO XVII Informativo semanal



INFO XVII.881 17 de octubre de 2016

Informtivo@attac.org http://attac-info.blogspot.com

Detener la barbarie

Mundo

TTIP, CETA Y TISA: EL ASALTO DE LAS MULTINACIONALES AL PLANETA, LA DEMOCRACIA Y LOS BIENES COMUNES. El sábado 15 de octubre se desarrollan manifestaciones en todo el Estado, convocadas por organizaciones y movimientos sociales, campesinos, vecinales, sindicales y políticos, para denunciar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP) que se prolonga ahora en el CETA y el TiSA, con el lema “Las personas y el planeta no somos mercancía”.

S**IRIA. DETENER LA BARBARIE** Por una alternativa democrática para Siria en contra la organización del Estado islámico (EI) y Assad y porque sea el pueblo sirio quien tenga la potestad de decidir su futuro. No son exigencias exageradas. Ni mucho menos.

“CONTROLAR” A LAS GRANDES EMPRESAS PROPONE LA SOCIEDAD CIVIL SUIZA
A negocios globales, responsabilidades también universales. Así lo define la Iniciativa a favor de las Multinacionales Responsables que fue entregada el lunes 10 de octubre al poder ejecutivo y que deberá ser consultada en las urnas en los próximos meses.

Latinoamérica

HABITAT III Y LA NUEVA AGENDA URBANA. La tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible –Habitat III–, que tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre, se realiza en un contexto muy diferente de las dos anteriores, realizadas en Vancouver 1976 y Estambul 1996.

NICARAGUA: EL MODELO POLÍTICO POPULISTA DE DANIEL ORTEGA Un gobierno con gran apoyo popular. Las mismas firmas encuestadoras que diagnostican que Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, cuenta con un apoyo popular que oscila entre el 30 % y el 10 %. Ortega gobierna con una aprobación popular de alrededor de 60 % o más. Este hecho me resulta sustancial, en cuanto el consenso es el único parámetro que asigna legitimidad a cualquier régimen político; y sin él es imposible cualquier cambio social progresivo.

CORPORACIONES DE INTERNET Y NUEVAS DINÁMICAS CAPITALISTAS. Hace varias décadas que los movimientos sociales tienen en la mira a las corporaciones transnacionales, su injerencia en la gobernanza global y sus abusos de poder. Los sectores de la minería, petróleo, agro-alimentación, farmacéutica, finanzas, están entre los grupos que más son objetos de monitoreo, crítica y movilizaciones. Un logro importante al respecto es la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de crear un instrumento internacional vinculante para las corporaciones transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.

****

Mundo

TTIP, CETA Y TISA: EL ASALTO DE LAS MULTINACIONALES AL PLANETA, LA DEMOCRACIA Y LOS BIENES COMUNES

Enrique Javier Díez Gutiérrez y Víctor Álvarez Terrón

El sábado 15 de octubre se desarrollan manifestaciones en todo el Estado, convocadas por organizaciones y movimientos sociales, campesinos, vecinales, sindicales y políticos, para denunciar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP) que se prolonga ahora en el CETA y el TiSA, con el lema "Las personas y el planeta no somos mercancía".

Entramos así en este otoño de resistencia, que se convoca desde los movimientos sociales y altermundistas exigiendo la suspensión del TTIP (entre multinacionales de la Unión Europea y de EEUU) y del CETA (entre multinacionales de la UE y de Canadá, caballo de Troya del TTIP), la nueva hornada de los tratados mal llamados de "libre" comercio e inversiones, que imponen los intereses económicos de las multinacionales en detrimento de los derechos de las personas. Para promover una sociedad igualitaria y respetuosa de los derechos de las personas y el medio ambiente es imprescindible replantear el sistema de comercio global que, a día de hoy, únicamente favorece la concentración del poder en manos de unas pocas multinacionales. El otoño en resistencia global llama a la movilización popular por el fin de la impunidad de las multinacionales y en pos de una acción colectiva para defender alternativas sociales como única vía para recuperar soberanía, democracia y derechos.

Organizamos recientemente un Curso de Verano de Derechos Humanos en la Universidad de León, que se celebró el último fin de semana de septiembre, titulado "TTIP: El Asalto de las Multinacionales a la Democracia", donde expertos y expertas internacionales y nacionales, como Susan George desde Francia, Eduardo Garzón, Adoración Guamán desde Luxemburgo, Arcadi Oliveres o Maria José Rodríguez Rejas desde México, analizaron las consecuencias de este tipo de tratados para nuestra sociedad, nuestra democracia y nuestro planeta explicando que las organizaciones sociales se oponen a este acuerdo porque vulnera derechos laborales, sociales o medioambientales y sólo beneficia a las grandes empresas.

Explicaban cómo los documentos filtrados por Greenpeace (los principales textos de la negociación permanecen ocultos a la ciudadanía, existiendo una cláusula para no permitir su publicación en 30 años) confirman una devaluación de las normativas europeas en materia de protección de salud pública, consumo y medio ambiente. Quieren que caigan leyes y políticas que aún protegen los derechos e intereses de las mayorías sociales en Europa y Norteamérica.

Pero igualmente grave es la pérdida de empleos que puede suponer el TTIP. Recientes estudios auguran hasta 600.000 empleos surpimidos. La propia Comisión Europea, cuyo discurso gira en torno a la creación de empleo, reconoce que diversos sectores tendrían pérdidas de empleo. Como comentaba la profesora Rodríguez Rejas, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un tratado similar, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, EEUU y Canadá, donde se preveía la creación masiva de puestos de trabajo, conllevó una pérdida neta de un millón de empleos.

Una consecuencia derivada de estos tratados comerciales, complementaba el economista Eduardo Garzón, es el aumento exponencial de las privatizaciones de los servicios públicos, como la educación, la sanidad, los servicios sociales, etc., bien directamente o de forma desagregada (ambulancias, comedores, gestión hospitalaria y educativa, etc.). Esto supone la implantación del lucro en los servicios públicos y el progresivo deterioro de los sistemas públicos de protección financiados públicamente, al considerarlos una "competencia desleal" con el sector lucrativo privado.

La equiparación de las normativas con las norteamericanas derivaría además en una rebaja de los estándares sociales y ambientales, profundizaba la presidenta del Transnational Institute de Ámsterdam, Susan George, al tomar como referente la legislación más laxa de cada zona, como han solicitado las grandes empresas. En la UE, avanzaba, rige un principio de precaución en el uso de sustancias químicas o pesticidas peligrosas, mientras que la legislación norteamericana da prioridad a la comercialización de los productos, de manera que sólo se retiran si se demuestra a posteriori que son dañinos. Lo mismo pasa con los transgénicos, la carne hormonada (aceptada en EE.UU.) o piensos fabricados con harinas de origen animal. Dado que EEUU tiene, por lo general, peores estándares ambientales (EEUU da prioridad al libre comercio sobre la protección del clima, dada la presión de la industria petrolera) y laborales que la UE, habría una pérdida de derechos sociales, laborales y ambientales cada vez mayor a favor de los intereses de las multinacionales.

Lo que nos mostró la profesora de Derecho del Trabajo, Adoración Guamán, es que se incluye un capítulo de protección de las inversiones, con el que las multinacionales extranjeras pueden denunciar legalmente a los Estados en tribunales internacionales privados, que dan prioridad a la salvaguarda de los inversionistas, por encima de las legislación social, laboral o ambiental del país, algo que ya ha ocurrido con otros tratados comerciales. Un ejemplo sería la privatización del agua en Estonia a una multinacional holandesa que demandó al Estado por querer impedir que subiera las tarifas del agua y la imposibilidad de revertir privatizaciones.

En definitiva, para todos los expertos y analistas, estos tratados sitúan los beneficios económicos por encima de la vida, la salud, los derechos sociales y laborales y el medio ambiente. La meta parece clara: eliminar las barreras sólo para la acumulación de beneficios de las multinacionales ya dominantes.

Las experiencias de Tratados de Libre Comercio anteriores han demostrado que las consecuencias han sido las contrarias a las prometidas: incremento de la desigualdad, aumento de los beneficios de las elites acomodadas, estancamiento de los salarios, crecimiento del desempleo, dumping social, declive de la protección social y destrucción de los derechos de las organizaciones de trabajadores y de su capacidad de negociación colectiva.

No podemos vaciar a la sociedad de derechos y a las instituciones democráticas de capacidad de decisión para cedérselo a las multinacionales, pedía el economista Arcadi Oliveres. Nunca antes ha existido una oposición a la política comercial y de inversión de la UE como con este tratado. Más de 1.800 gobiernos municipales y regionales, pymes y figuras de la cultura integran un movimiento contra los tratados como TTIP, CETA y TiSA con un impacto político cada vez mayor.

Nos vemos, pues, el sábado 15 en las calles defendiendo la democracia, los bienes comunes y el planeta en unos tiempos en que una economía criminal ha demostrado hasta dónde puede llegar en el saqueo y el atropello a la voluntad popular. Allí estaremos construyendo una “geopolítica de las resistencias” frente a la configuración de un gobierno económico mundial sustraído a cualquier control democrático y regido por el afán de saqueo de nuestros bienes comunes y de nuestros derechos.

Enrique Javier Díez Gutiérrez y Víctor Álvarez Terrón. Universidad de León y UNED.

SIRIA. DETENER LA BARBARIE

Josep Daher

El pasado sábado 1° de octubre se celebraron en diferentes ciudades europeas concentraciones, minoritarias, en solidaridad con el pueblo sirio y por el cese inmediato de los bombardeos y el asedio en Alepo, por la ayuda humanitaria y la acogida a las personas refugiadas, por una alternativa democrática para Siria en contra la organización del Estado islámico (EI) y Assad y porque sea el pueblo sirio quien tenga la potestad de decidir su futuro. No son exigencias exageradas. Ni mucho menos. Hay que apoyarlas todas.

Detener el actual diluvio de bombas de todo tipo que tanto la aviación rusa como la del régimen están lanzando sobre Alepo asesinando a sus habitantes y destruyendo con saña lo poco que queda de infraestructura vital, un verdadero crimen de guerra a gran escala, es un mínimo que cualquier solidaridad mínimamente humanitaria debía tener como primer punto del orden del día. No hablamos ya de “daños colaterales”. Es muchísimo peor.

Se atribuye al presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt la frase referida al dictador Somoza de que “Puede ser que Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. La izquierda, el movimiento de solidaridad, la gente progresista, no puede tener “sus” dictadores. En el futuro de la región no pueden jugar ningún papel gentes como Putin o Assad. Ni tampoco un Occidente que inunda de armas toda la región y, salvo casos puntuales, ha negado cualquier apoyo a la oposición al régimen y trata con crueldad a las miles de personas refugiadas que tratan de huir de horror. El futuro de Siria lo tiene que poder decidir el propio pueblo sirio.

El movimiento antiguerra y de solidaridad internacionalista tiene que reactivarse. El silencio es inaceptable. Es una obligación política y moral. Lo que está en juego va más allá del hoy. Está en juego, además, el futuro de todos los pueblos de la región, que no están condenados por ningún destino fatal a no tener más futuro que la alternancia entre dictaduras militares y despotismo teocrático como nos quieren hacer creer interesadamente todos las potencias que intervienen en la región.
A l´encontre – Rebelión

“CONTROLAR” A LAS GRANDES EMPRESAS PROPONE LA SOCIEDAD CIVIL SUIZA



120 000 firmas respaldan iniciativa popular “Multinacionales Responsables”

Sergio Ferrari*

Berna, Suiza

A negocios globales, responsabilidades también universales. Así lo define la Iniciativa a favor de las Multinacionales Responsables que fue entregada el lunes 10 de octubre al poder ejecutivo y que deberá ser consultada en las urnas en los próximos meses.

Para franquear el primer paso que exige la constitución helvética, las 80 organizaciones de la cooperación con el sur, ambientalistas, sindicales, empresariales, religiosas y de derechos humanos que sostienen esta propuesta, recolectaron 120 mil firmas válidas en los últimos 18 meses, superando en 20 mil el número exigido por la carta magna. Una de las movilizaciones de la sociedad civil helvética más importantes en la última década.

Una victoria significativa en un tiempo relativamente corto, tal como lo enfatizan, también, los promotores de la Iniciativa, lanzada en abril del 2015 y continuadora en su contenido de la petición popular “Derechos sin Fronteras” que en 2012 obtuviera ya un primer éxito: el apoyo de 135 mil firmantes.

Si en una próxima etapa la ciudadanía helvética refrendara el contenido de esta propuesta de enmienda constitucional, las empresas suizas deberán aplicar en el futuro, en todas partes donde operen, los cánones ambientales y de derechos humanos a los cuales están sujetos en Suiza mismo. Y deberán, entonces, analizar a fondo los riesgos que su presencia o la de sus filiales pudiera ocasionar en el país que sea.
En un informe publicado en abril del 2016 por las prestigiosas ONG de cooperación Acción Cuaresmal y Pan para el Prójimo – sobre la base del estudio del comportamiento de las 200 más grandes empresas helvéticas-, se llega a conclusiones elocuentes. El 61% de las mismas no cuentan con un código de conducta ni una política de derechos humanos. Solo un 11 % comenzó a introducir los Principios rectores de Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos, aprobados ya en 2011 por ese organismo internacional.

Este estudio confirma que de forma voluntaria solo una muy pequeña minoría de multinacionales adopta políticas de derechos humanos transparentes. Tal conclusión demuele así el argumento empresarial que exige la libre regulación del comportamiento de sus actividades sin obligación jurídica alguna.

Para los promotores de la Iniciativa a favor de Multinacionales Responsables es fundamental introducir en la ley el deber de diligencia debida. Adoptado por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas este principio constituye un instrumento de prevención importante. Ya que las empresas deben examinar el impacto probable de sus actividades y en caso de violaciones potenciales o efectivas de los derechos humanos o ambientales están obligadas a tomar medidas adecuadas para evitarlas.

Comportamientos sistemáticos de empresas helvéticas serían sancionados en caso que la iniciativa fuera aceptada en las urnas por la ciudadanía. Como la polución que produce la firma Glencore en ríos o reservas, en distintos lugares de la República del Congo. O el trabajo abusivo de niños y adolescentes en plantaciones de cacao de diversos países del África occidental –que alimentan la industria chocolatera suiza- ; o en las minas de oro en Togo previa importación por la refinería Valcambi instalada en la Suiza italiana.
Un estudio de la Universidad de Maastricht de Holanda, analizó 1800 casos concretos de violaciones de derechos esenciales por parte de multinacionales. Y concluyó en 2015 que Suiza ocupaba el 9no puesto entre los países cuyas empresas están entre las más frecuentemente involucradas en violaciones de derechos esenciales.

La coalición que presentó la Iniciativa el segundo lunes de octubre acaba de comunicar un sondeo de opinión representativo entre la población. El mismo revela que un 89 % de los consultados quieren que las multinacionales suizas sean obligadas a respetar los derechos humanos y ambientales también en el extranjero. Un 92% de pronunciaron a favor que las mismas hagan cumplir dichos derechos tanto a sus filiales como a las empresas locales con las que realicen negocios. + (PE)

**Sergio Ferrari en colaboración con E-CHANGER, ONG de cooperación solidaria miembro que hace parte de las promotoras de la Iniciativa*.

HABITAT III Y LA NUEVA AGENDA URBANA

Sally Burch

La tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible –Habitat III–, que tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre, se realiza en un contexto muy diferente de las dos anteriores, realizadas en Vancouver 1976 y Estambul 1996. Hoy la realidad se presenta marcada, entre otros aspectos, por el acelerado crecimiento de las ciudades en las últimas décadas, a la par del éxodo rural –se estima que de aquí a mediados del siglo, el porcentaje de la población mundial que vive en zonas urbanas pasará de 51% a 67%–, la reciente burbuja financiera inmobiliaria que precipitó la crisis financiera mundial de 2007-2008, además de la crisis ambiental y el calentamiento global.

La Nueva Agenda Urbana (NAU)[1], documento central que los gobiernos adoptarán en Quito -cuyo contenido de 175 artículos ya fue convenido el mes pasado tras dos años de negociaciones-, sitúa el reto de los asentamientos humanos en la agenda del Desarrollo Sostenible Post-2015 y afirma tres principios: no dejar a nadie atrás, economías urbanas sostenibles e inclusivas y sostenibilidad ambiental. Entre los conceptos y lineamientos fundamentales que promueve la Agenda para que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles y participativas, la NAU incluye: la densificación urbana, en lugar de la extensión del perímetro de las ciudades; el uso mixto del suelo, en lugar de la zonificación; la preservación de los paisajes y recursos naturales y los espacios públicos para todos. Además, pone énfasis en los vínculos urbano-rurales.

Como en el caso de otras conferencias mundiales de Naciones Unidas, la Agenda que se adopta no es vinculante, pero sí establece un marco referencial para la adopción de políticas, que en muchos casos orienta la actuación de los gobiernos nacionales, sub-nacionales/intermedios y locales, a la vez que da mayor legitimidad a la acción de los actores no-estatales (tanto en el caso de organizaciones ciudadanas como de la empresa privada, siempre presente –e influyente– en estos espacios). Además, en esta oportunidad se han incluido mecanismos de monitoreo y revisión sobre los avances en la implementación de la agenda.

Nuevos temas

Los organizadores de Habitat informan que hubo un amplio proceso de consultas previas con autoridades locales, entidades de la sociedad civil y otros actores; que recibieron aportes de expertos y numerosos documentos de propuestas que fueron tomados en cuenta para elaborar la Agenda. Muchos actores de los gobiernos locales y movimientos sociales consideran, sin embargo, contradictorio que la Agenda sea aprobada por los gobiernos nacionales, y que los gobiernos intermedios y locales y sectores ciudadanos, que son los directamente concernidos, no tengan participación directa en las decisiones.

Entre las propuestas que han logrado un cierto avance en la NAU está el enfoque de integrar campo y ciudad. Esta propuesta la levantan particularmente los gobiernos regionales o sub-nacionales, cuya característica es que su gestión abarca las áreas urbanas y rurales. Este tema será debatido esta semana en Bogotá en la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales (12-15 octubre), donde se espera la participación de 2000 autoridades, para definir recomendaciones frente a la Nueva Agenda Urbana.

Según el Presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador –CONGOPE—, Gustavo Baroja, ésta sería la primera vez que los gobiernos intermedios participan en reuniones del proceso Habitat. La propuesta que llevan es justamente que se debe poner énfasis en el desarrollo territorial integral, más que solo en desarrollo urbano, ya que “la ciudad se nutre del campo, del agua cuyas vertientes están en el sector rural; se nutre de productos, sea primarios o de la agroindustria, que vienen del campo; de mano de obra para su infraestructura que viene del campo”; y sin embargo, “sigue habiendo una relación inequitativa, desigual e injusta entre campo y ciudad” que habría que superar con políticas desde una visión integral. De hecho, hay avances en este sentido, ya que la NAU hace frecuente referencia al “desarrollo urbano y territorial”, algo que no estaba presente en la Declaración de Estambul.

Una de las principales críticas de redes internacionales de movimientos sociales es que la Agenda de Quito no considera la importancia de proponer medidas frente al mercado financiero mundial. Vale recordar que la crisis económica del 2007-2008 fue debido, sobre todo, al descontrol del mercado inmobiliario y de hipotecas, que conllevó a la burbuja de especulación y su subsecuente estallido que dejó un saldo de millones de personas en la pobreza y miles de familias desalojadas de sus hogares en países como EEUU y España.

En una Carta Abierta[2], de inicios de este año, donde constatan el fracaso del modelo de vivienda basado en dueños privados e hipotecas, estos actores advierten sobre un próximo colapso en Asia oriental, debido al crecimiento explosivo de los préstamos hipotecarios. “Los mega-proyectos liderados por el mercado, el

acaparamiento de tierras y los proyectos de renovación urbana provocan el desplazamiento de personas y la destrucción de comunidades por todo el mundo. Esto es debido a que el capital financiero privado solo invierte con el interés de una alta rentabilidad para sus agentes financieros", señala la carta.

No obstante, actores de la sociedad civil señalan también importantes logros en la NAU, en particular en referencia al Derecho a la Ciudad. Por primera vez en un documento de la ONU, se hace referencia al Derecho a la Ciudad (art. 11)[3], concepto resultante de una lucha popular de varias décadas, que refiere al derecho de todos los y las habitantes, presentes y futuros, temporales y permanentes, de utilizar, ocupar y producir ciudades, pueblos y asentamientos que sean justos, inclusivos y sostenibles, y que sean entendidos como un bien común esencial para una vida plena y digna. Si bien no es aún un derecho consagrado internacionalmente, la NAU sí incorpora esta visión y saluda que haya gobiernos locales y nacionales que han reconocido este derecho. Además, a lo largo de la Agenda de Quito hay numerosas referencias a planteamientos relacionados con el Derecho a la Ciudad.[4]

Agendas paralelas

Para debatir temas como estos, en Quito, además de la Conferencia oficial, se están organizando múltiples eventos paralelos, en los cuales se espera la participación de más de 30 mil personas. Entre ellos se incluye una Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, una Asamblea General de la Organización de Regiones Unidas, un encuentro de gobiernos intermedios, un foro de gobiernos locales y diversas ferias y exposiciones.

Del lado de la sociedad civil, se realizará también un Habitat 3 Alternativo, como espacio autónomo de la academia y organizaciones sociales, reconocido en el marco del evento oficial. Por su lado, como en anteriores eventos internacionales sobre el hábitat, diversas organizaciones han convocado a un contraevento paralelo, en Quito y Guayaquil, titulado Resistencia Habitat III[5], que se plantea como "espacio de movilización y construcción de propuestas desde los sectores populares y desposeídos del mundo, para cuestionar el modelo urbano global basado en la alianza gubernamental con el capital que no busca el bienestar humano, sino el crecimiento de los grupos de poder".

Si bien los eventos paralelos ya no podrán incidir en el contenido de la Nueva Agenda Urbana a adoptarse en Quito, el hecho es que las declaraciones de la ONU solo adquieren vida si los actores las adoptan o las critican, empujan por su implementación, desarrollan iniciativas propias; y en este sentido, Habitat III es una oportunidad para profundizar el debate y ampliar el conocimiento sobre las propuestas e iniciativas para mejorar la vida en los asentamientos humanos del planeta.

- Sally Burch es periodista de ALAI.

NICARAGUA: EL MODELO POLÍTICO POPULISTA DE DANIEL ORTEGA

Amaru Barahona

He aquí una condensada valoración del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.

*) Un gobierno con gran apoyo popular. Las mismas firmas encuestadoras que diagnostican que Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, cuenta con un apoyo popular que oscila entre el 30 % y el 10 % (CID Gallup, Borge y asociados, COPEL, y otras muchas), revelan que Ortega gobierna con una aprobación popular de alrededor de 60 % o más. Este hecho me resulta sustancial, en cuanto el consenso es el único parámetro que asigna legitimidad a cualquier régimen político; y sin él es imposible cualquier cambio social progresivo.

*) No hay revolución, pero sí populismo progresista. Hablar de "revolución" o "socialismo" en el régimen de Ortega es retórica cristalina. Sin embargo, del 2007 hasta hoy, el diseño político impulsado responde a los cánones del populismo de izquierda definido por los teóricos latinoamericanos de la dependencia. Un bloque en el poder donde confluyen los siguientes componentes: a) la alianza hegemónica entre el antiguo capital oligárquico y los nuevos ricos con orígenes sandinistas. b) Una serie de providencias asistenciales que, en alguna medida, han beneficiado a las clases populares. Y c) Un margen importante de autonomía en política internacional, respecto a los lineamientos que impone USA como centro que dirige el proyecto de capitalismo imperialista en el siglo XXI.

*) La política económica: una convivencia de antípodas. Al llegar nuevamente al gobierno en el 2007, Ortega heredó un implante estructural del neoliberalismo en la economía, en estado muy avanzado. Producto de 16 años de gobiernos de la derecha oligárquica colonizada. Ortega no ha variado un ápice la estructura

económica heredada, y más bien la ha profundizado. Ha firmado más TLC neoliberales que los gobiernos anteriores, y la política económica oficial (la que se deriva de la aplicación presupuestaria) ha estado estrictamente tutelada por el FMI mediante un equipo económico nativo que le sirve de cadena de transmisión. Esta dirección económica – cadena de transmisión, ha venido aplicando las recetas más conservadores de la ortodoxia neoliberal: Estado mínimo cercenado de sus funciones estratégicas; rigurosa contracción del gasto público; política fiscal que favorece a los ingresos y patrimonios más elevados; bajo nivel de los salarios (los más bajos de Centroamérica); limitadísima cobertura del seguro social y de prestaciones laborales entre la población trabajadora, cerca del 27 % al 30 % de la PEA (con una presión del FMI para que esta cobertura se reduzca aún más); apertura indiscriminada y desgravación acelerada (en medio de una pasión orgiástica por nuevas firmas de TLC). Este fanatismo por los TLC se complementa con un acelerado y crónico incremento del déficit comercial y del endeudamiento con los organismos financieros del sistema (Banco Mundial, BID, FMI,BCIE); un aumento lenitivo de las remesas familiares (aproximadamente 1442 millones de dólares anuales, lo que devela un sistema que sigue exportando su fuerza de trabajo); y una inversión extranjera esencialmente depredadora, especializada en la desacumulación interna de capital.

Sin embargo, junto a la conducción oficial tutelada por el FMI, existe otro vector de política económica, opuesto a la ortodoxia neoliberal. Éste surge del funcionamiento de una suerte de Estado fáctico paralelo que deriva sus políticas de la cooperación venezolana y del proyecto ALBA (En el lapso 2007 – 2015, Nicaragua ha recibido un promedio anual de aproximadamente 500 millones de dólares, por concepto de la ayuda venezolana). Estas políticas han permitido superar la parálisis y el caos energético heredado del gobierno de Enrique Bolaños, y también desarrollar los programas hambre cero, usura cero, de viviendas populares, de crédito productivo, de subsidios en especie (urea, semillas) y asistencia técnica a las cooperativas, de subsidios al transporte colectivo, de subsidios monetarios y en especie a los asalariados, de subsidio a las tarifas eléctricas, de titulación de tierras a pequeños propietarios rurales y urbanos, de fortalecimiento municipal y desarrollo comunitario, de una favorable campaña de alfabetización; de la desmercantilización de los servicios de educación y salud pública, y una pequeña mejora en la calidad de su oferta, etc. Son políticas contrarias y alternativas al enfoque oficial conducido por el FMI, y gracias a ellas el gobierno ha favorecido al mayoritario sector de trabajadores informales (más del 50 % de la PEA); a los pequeños y medianos productores agrícolas, especialmente aquellos organizados en cooperativas; ha logrado una significativa mejora de la ingesta alimentaria de la población (según la FAO, entre 2010 y 2012 la subnutrición se redujo de un 55.1 % a un 20.1 %); ha alcanzado alguna reducción de la pobreza, sobre todo la pobreza extrema; y ha dinamizado el mercado interno.

El maridaje de políticas FMI – ayuda venezolana y proyecto ALBA, ha posibilitado durante el lapso 2007 – 2015, un crecimiento promedio anual del PIB de 4.5 %, uno de los más altos de América Latina.
Empero, el enfoque económico de Ortega de convivencia de antípodas, está entrando en una profunda crisis con trazos de callejón sin salida. Por dos razones. La primera, debido a la coyuntura venezolana, su cooperación en el 2016 casi desapareció y tiende a extinguirse. Sin la ayuda venezolana los programas sociales no son sostenibles.

La segunda razón. El circuito espurio que sostiene la políticas FMI: incremento crónico del déficit comercial – remesas familiares paliativas – inversión extranjera depredadora – acelerado endeudamiento con las IFIS, demarca una hoja de ruta que sólo tiene como destino final la asfixia financiera, y establece las condiciones que propician el chantaje político estadounidense, cuya dinámica ya está en marcha.

*) Un viejo síndrome de la derecha colonizada. Como lo ha hecho en diferentes partes del mundo, USA con el apoyo de su furgón de cola, la Unión Europea, ha creado un segmento mercenario en la sociedad civil nicaragüense que actúa conforme sus directrices. Está compuesto por un pequeño grupo político resultado de la alianza de dos organizaciones: la que encabeza el oligarca Eduardo Montealegre ("el hombre de la Embajada"), que últimamente se bautiza como "Ciudadanos por la libertad"; y la otra organización es la que se denomina MRS ("Movimiento Renovador Sandinista"), que la integran antiguos sandinistas enfrentados a Ortega.

Ambas financiadas por la AID, la NED (National Endowment for Democracy), las fundaciones creadas por el bipartidismo USA (Republicanos y Demócratas), y la Unión Europea, se autodenominan como "la auténtica oposición a Daniel Ortega" aunque según todas las encuestas, con dificultad logran el 5 % de apoyo popular. Esta autollamada "auténtica oposición" se ha dedicado a hacer lo que históricamente ha hecho la oligarquía colonizada nica, cuando la relación de fuerzas internas no le permite vencer al enemigo: solicitar la intervención de USA (así llegó William Walker a Centroamérica en el siglo XIX; así se produjo la ocupación colonial de Nicaragua de 1911 a 1934; así se gestó la guerra "contra" de Reagan y Bush padre en los años 80 del siglo pasado).

Resultado de su gestión intervencionista, el Congreso USA ya aprobó un proyecto de ley nombrado “Nica Act”, que se encuentra en el Senado para continuar su curso de aprobación. Si se aprueba la “Nica Act”, el gobierno USA vetaría todos los créditos de las IFIS para Nicaragua.

Sin la ayuda venezolana y asfixiado financieramente por las IFIS, el modelo populista de Ortega llegaría a su fase de crisis terminal.

Alguien lúcido de su círculo áulico, alertó a Ortega de que lo que está sucediendo podría acontecer. Por ello, Ortega está buscando una salida con el proyecto de canal interoceánico. La viabilidad de este proyecto no es descartable, pero está asediada por escenarios inciertos cuya complejidad amerita un análisis específico.
*) Lo más positivo: la política exterior. No es posible ignorar el papel relevante que ha jugado el gobierno Ortega en la conformación de un bloque de fuerzas que, a nivel mundial, resiste la voluntad del Establishment estadounidense de imponer un orden imperial global unipolar que responda implacablemente a sus dictados.

Ahí están los hechos.

-) La adscripción consecuente de Nicaragua al ALBA, que lidera la lucha antimperialista y la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe.

-) La promoción de la unidad de Nuestra América, y el alineamiento y coordinación de Nicaragua con el grupo de gobiernos latinoamericanos de signo progresista.
-) La brega por fortalecer a la CELAC, con la perspectiva de que se convierta en el organismo que desplace a la OEA.

-) El apoyo brindado al organismo que aglutina a los países emergentes antisistema, que surgió con el mote de BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Y que después del golpe de Estado en Brasil tendrá que cambiar su denominación (yo propondría la de CRIS, es decir, China, Rusia, India y Sudáfrica). -) Las relaciones de colaboración de Nicaragua con Rusia, China e Irán; la defensa firme del pueblo palestino frente al accionar genocida israelí.

-) El papel de liderazgo que jugó Nicaragua en la oposición al golpe de Estado en Honduras.

-) La brillante gestión de Miguel De Escoto como Presidente de la Asamblea General de la ONU, que durante un año fue capaz de evidenciar el funcionamiento de una organización mundial gobernada por los pueblos.

Esta autonomía relativa en política internacional explica también la desconexión del Ejército y la Policía nicaragüenses del “tubo” estadounidense, que ha posibilitado que en Nicaragua se den dos fenómenos insólitos: que desde México hasta Colombia, sea el único país en que el narcotráfico no ha penetrado la cúpula de las fuerzas armadas. Y que a pesar de sus índices de pobreza sea uno de los pocos países en América Latina y el mundo con altos niveles de seguridad ciudadana.
Rebelión

CORPORACIONES DE INTERNET Y NUEVAS DINÁMICAS CAPITALISTAS

Sally Burch

Hace varias décadas que los movimientos sociales tienen en la mira a las corporaciones transnacionales, su injerencia en la gobernanza global y sus abusos de poder. Los sectores de la minería, petróleo, agro-alimentación, farmacéutica, finanzas, están entre los grupos que más son objetos de monitoreo, crítica y movilizaciones. Un logro importante al respecto es la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de crear un instrumento internacional vinculante para las corporaciones transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.

No obstante, la actuación en este plano suele pasar por alto a las corporaciones globales de Internet, tal vez porque se las ve como más “amigables”, por la utilidad de sus servicios en la vida cotidiana. Toda vez, desde hace una década, este sector es uno de los de mayor crecimiento y concentración monopólica, con nuevas dinámicas capitalistas, cuyo epicentro se ubica en Silicon Valley (California). Sus principales protagonistas, --Google, Facebook, Amazon, Paypal, Uber, Microsoft y similares--, extienden sus operaciones hacia cada vez más áreas de la economía y la sociedad, donde forman alianzas con otros sectores transnacionales, como parte del rápido proceso de transición hacia un nuevo paradigma tecnológico, que va a revolucionar nuestras sociedades, para mejor o para peor.

En toda la historia, la innovación tecnológica ha permitido a las sociedades humanas mejorar sus condiciones de vida. Pero cuando el control de estas tecnologías se concentra en pocas manos, ellas se suelen convertir en herramientas para controlar a la sociedad misma, consolidando el dominio de determinados grupos de poder. Es particularmente el caso cuando se trata de tecnologías aptas para la organización social a gran escala, como sucede con las tecnologías digitales. En manos de la ciudadanía o de sistemas públicos bajo control democrático, podrían traer grandes beneficios; pero la tendencia dominante es a la privatización.

Por ejemplo, las actuales tecnologías de vigilancia, con cámaras, sensores, etc., no solo sirven para precautelar la seguridad de un lugar determinado. Al arrojar datos que permiten identificar a las personas (lectura de iris, reconocimiento de caras), o vehículos (lector de placas), otorgan a quienes almacenan estos datos el poder de rastrear los movimientos y el comportamiento de las personas. En ausencia de un marco adecuado de protección de derechos, son susceptibles de ser utilizados para otros fines, como la publicidad dirigida (según lo que uno mira en los almacenes), la discriminación (por ejemplo para solicitar un empleo) e incluso el hostigamiento o el chantaje[1].

Estas redes digitales inteligentes cuentan con ciertas características que las distinguen de tecnologías anteriores y que son justamente lo que favorece la concentración de poder. Primero, el "efecto red" (o sea, la concentración de usuarios en torno a las plataformas más populares) favorece a las empresas más grandes que forman monopolios, absorbiendo o eliminando la competencia.

En segundo lugar, la capacidad de estas redes de obviar el tiempo y la distancia permite que sean controladas en forma remota. El individuo que interactúa con su aparato tal vez encuentra más variedad de opciones que con tecnologías anteriores; pero solo puede escoger entre las que el centro de poder remoto le permite. Cuando son comunidades que cedan poder de decisión a estos centros remotos, el problema es mucho mayor. En todo caso, como primera condición, implica entregar a estas empresas el conjunto de datos generados, ya que constituyen su principal fuente de enriquecimiento (especialmente con la venta a anunciantes), pero sobre todo son la materia prima de los sistemas inteligentes que requieren alimentarse de enormes cantidades de datos a procesar y analizar.

Un tercer factor es que estas tecnologías inteligentes cada vez más llevan controles activos incorporados en su sistema mismo, como los algoritmos, que la mayoría de veces son opacos al usuario, y cuya programación tiende a favorecer los intereses de sus dueños. Con la diversificación vertiginosa de aparatos que contienen sistemas inteligentes, cuya explosión veremos en la próxima década, este problema se multiplicará casi infinitamente.

Control corporativo

Todo ello está ocurriendo, a escala mundial, principalmente bajo iniciativa de estas grandes corporaciones y en función de su propia visión del futuro, y ello prácticamente sin aportes desde una óptica de defensa del interés público, y mucho menos supeditado a mecanismos democráticos de decisión o escrutinio. Podría ser un problema manejable si se tratara de una función limitada, como la comercialización digital o los servicios de chat. Pero va mucho más allá, a medida que se abarcan y transforman sectores enteros –de transporte, educación, agricultura– o incluso comunidades enteras, como es el caso de las llamadas "ciudades inteligentes".

En efecto, con la transformación de urbes en "ciudades inteligentes", se trata de construir enormes sistemas cuasi-públicos, pero generalmente bajo control corporativo con fines de lucro, para administrar los flujos de tráfico, los sistemas de salud y de comunicaciones, la red eléctrica, el agua potable…. Un sinfín de funciones antes administradas, o por lo menos reglamentadas, por las autoridades públicas. Su ventaja sería mejorar la eficiencia y reducir costos. Su peligro potencial: la falta de control democrático y de garantías de derechos; además, los datos que se recopilan para optimizar la operación muchas veces quedan como propiedad de la empresa, y no son devueltos a la ciudad. Generan, además, vulnerabilidades cuando, para ahorrar costos, la empresa no invierte lo suficiente en mecanismos de seguridad de los sistemas y datos.

En distintos sectores de intervención social surgen diferentes expresiones de esta problemática, que será muy difícil de enfrentar en forma aislada. Para solo nombrar brevemente algunas: en lo laboral, la automatización que se ha visto en la industria se va a extender a sectores de servicios, con un impacto en el empleo también de sectores medios; con la "agricultura climáticamente inteligente", los agricultores se volverán aun más dependientes de las grandes empresas, como Monsanto (que ahora se fusiona con Bayer) que está haciendo grandes inversiones en sistemas de datos e inteligencia artificial (en alianza, entre otros, con la Bill Gates Foundation). En transporte, los carros de auto-conducción ya están en la fase de experimentación en calles y

carreteras; pronto serán los buses y camiones.

Si hasta ahora se destacan las tecnologías digitales principalmente en la comunicación, dentro de poco abarcarán casi todas las áreas del quehacer humano. De mantenerse bajo el parámetro de control corporativo transnacional, será muy difícil enfrentarlo en forma aislada desde cada sector. No es que estas tecnologías sean malas en sí: al contrario, manejadas por las comunidades humanas, podrían traer grandes beneficios. El reto es cómo recuperar este control, algo que difícilmente se podrá lograr con luchas dispersas o solo en el plano nacional. Requiere un abordaje global y multisectorial, donde uno de los factores ineludibles es cambiar el régimen global de gobernanza de Internet. Pero queda poco tiempo para emprenderlo[2].

Sally Burch es periodista de ALAI. El presente artículo se basa en aportes de los debates en curso en el proceso del Foro Social de Internet y la Coalición Just Net (justnetcoalition.org).

Artículo publicado en la edición 517 (septiembre 2016) de la revista América Latina en Movimiento de ALAI, titulada “El poder transnacional y los nuevos TLCs”. http://www.alainet.org/es/revistas/517

1] Se han reportado, por ejemplo, casos de hostigamiento utilizando vigilancia tecnológica, por parte de Monsanto, contra agricultores en EEUU que no quieren usar sus semillas y agrotóxicos. Ver por ejemplo: BIN report, Farmer Who Defied Monsanto Mafia Beaten Down: Stalked, Terrorized, Ruined http://bit.ly/2cd5zKp

[2] Uno de los espacios que se propone abordarlo en forma amplia es la iniciativa del Foro Social de Internet (www.internetsocialforum.net).

****

RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo881.zip

PDF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo881.pdf

SUSCRIPCIÓN Y DES-SUSCRIPCIÓN A “El Grano de Arena”o CAMBIO DE MAIL

:http://list.attac.org/wws/subscribe/attac-informativo

Para obtener un número anterior entrar en
http://list.attac.org/wws/arc/attac-informativo

Distribución: **Tom Roberts** Edición: **Susana Merino** Co-fundadora de ATTAC Argentina